

**Emilio Pradilla Cobos**

**Los grandes problemas regionales y urbanos generados por el despliegue del capitalismo industrial en México y la urbanización generalizada que determinó no fueron resueltos por el patrón de acumulación de capital con intervencionismo estatal imperante en la posguerra. La crisis del modelo, la abrupta aplicación del ajuste estructural neoliberal desde 1983 –partero de otro régimen de acumulación– y la inserción asimétrica y subordinada del país en la globalización han generado nuevas contradicciones territoriales que se añaden a las viejas.**

La renuncia abierta o encubierta del Estado mexicano a la planeación territorial y el advenimiento de políticas urbanas y regionales pragmáticas y coyunturales, signadas por el protagonismo del capital privado, sobre todo transnacional, no permiten avizorar la reversión de las desigualdades y la solución de los problemas territoriales. Pero lo más preocupante es que los sectores políticos que se definen como “de izquierda”, que en el pasado se preocuparon por esta temática, hoy han dejado de hacerlo y, cuando gobiernan, lo hacen también sin apelar a la planeación, aplicando un efectismo pragmático homólogo al de la derecha y con similar subordinación al capital privado.

Es urgente e imprescindible reabrir el debate sobre el tema, pues estos problemas, que afectan a millones de trabajadores mexicanos excluidos social y territorialmente, requieren de políticas democráticas y de izquierda, específicas e innovadoras, para enfrentar realidades nuevas. Para poder construir propuestas políticas alternativas de solución, la primera condición es tener un diagnóstico claro de los grandes problemas que afectan a nuestras regiones y ciudades, establecer su jerarquía y causalidad y definir a qué sectores sociales afecta fundamentalmente.

**Las crecientes desigualdades del desarrollo regional**

Dos decenios de aplicación de políticas neoliberales de ajuste estructural y de inserción asimétrica y subordinada en la excluyente globalización en curso, entendida como fase actual del proceso secular de mundialización del capital (Gray, 1998; Cárdenas, 1999; Aguilar, 2002) y una década de operación contradictoria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Pradilla, 1996a) han acentuado las graves desigualdades históricas del desarrollo

económico y social entre las regiones mexicanas, gestadas sobre todo durante el despliegue del capitalismo industrial en la posguerra (Pradilla, 1993, cap. I). Durante los últimos dos decenios, los estados de la frontera con Estados Unidos (Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas) y algunas ciudades del centro-norte (Aguascalientes, Gómez Palacio, Hermosillo, Saltillo-Ramos Arispe), gracias a la relocalización de la industria automotriz y de autopartes y al auge de la industria maquiladora de exportación dotada de amplias ventajas fiscales y arancelarias (Pradilla, 1993, cap. III), se integraron subordinadamente al bloque norteamericano, aumentaron significativamente su participación en el producto interno bruto y en el manufacturero nacional y recibieron lo fundamental de la inversión pública y privada y de los escasos beneficios económicos del libre comercio. Al mismo tiempo, la economía y la vida social del territorio fronterizo se hicieron cada vez más dependientes de los ciclos de la acumulación de capital en Estados Unidos. Sin embargo, la “ventaja competitiva” de la maquila, basada en el régimen de inestabilidad laboral –trabajo temporal–, los bajos salarios impuestos a sus trabajadores y la localización territorial, no garantizó a sus habitantes condiciones de vida adecuadas y generó complejos problemas sociales y urbanos. Hoy, el auge maquilador, al cual apostaron los gobiernos neoliberales como única política industrial, parece haber concluido, iniciándose una fase de relocalización de la maquila en otros países, sobre todo en China, dejando tras de sí una secuela de desempleo, explotación, pobreza y violencia . A este factor se añade el flujo histórico de emigrantes hacia Estados Unidos, que deja similares rastros en los lugares fronterizos de tránsito, donde permanece temporal o definitivamente una parte de los desplazados.

La Región Centro (Distrito Federal, México, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos), cuyas zonas metropolitanas forman el mayor polo económico e industrial del país y cuya economía e industria se orientaron esencialmente al mercado interno, ha sufrido una notoria pérdida de dinamismo económico y se desindustrializa, poniendo en riesgo su sostenibilidad socioeconómica. Este proceso es particularmente notorio en el Distrito Federal y el Estado de México que, con la concentración económica en la Zona Metropolitana del Valle de México, constituyeron el polo dominante y más dinámico de la economía mexicana en la segunda mitad del siglo pasado. Sólo una parte minoritaria de las grandes empresas localizadas en la región ha logrado reconvertirse en función de la economía abierta (Fideicomiso, 2000, cap. 1).

Algunos enclaves turísticos de playa, sobre todo en la costa del Pacífico (Los Cabos, Puerto Vallarta, Manzanillo, Mazatlán, Ixtapa, Acapulco, Huatulco) y la

llamada Riviera Maya (Cancún, Cozumel, Isla Mujeres) aportan dinamismo demográfico y económico a sus emplazamientos, sin dejar muchos beneficios a sus sectores populares ni generar efectos importantes de difusión y encadenamiento regional. Al mismo tiempo, la actividad turística degrada notoriamente el ambiente natural circundante, descompone las formas tradicionales de producción agraria y destruye las identidades sociales y culturales.

Por su parte, las regiones del sur, con importante presencia campesina e indígena (Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Veracruz, Guerrero y parte de Puebla) y del centro-norte semiárido se hunden cada vez más en el atraso y la pobreza. Tres decenios de crisis agrícola agudizada por la apertura comercial, que afectan a todas las áreas agropecuarias con excepción de algunos enclaves de agricultura de exportación, han causado mayores estragos en estas regiones de agricultura campesina e indígena muy atrasada. La desgravación total de los productos agropecuarios en el TLCAN profundizará esta crisis, hasta llevarla a un nivel mayor de degradación productiva, crisis social y conflicto político (Bartra, 2002). La diferencia de ingreso por habitante entre los estados más pobres (Chiapas y Oaxaca) y el más rico (Distrito Federal) llegó hasta 6.1 veces en 2000. Chiapas, Oaxaca y Guerrero se ubican en el ámbito nacional como los estados que tienen un mayor porcentaje de su población en situación de indigencia, superior al 70 por ciento (Boltvinik, 2002).

Un segmento importante de la población de los estados más atrasados sobrevive mediante la emigración legal o indocumentada de una parte de sus miembros a Estados Unidos y de las remesas de ingresos que estos envían a sus familiares, para lo cual los emigrantes tienen que enfrentar la represión de la policía estadounidense, el riesgo de morir en la travesía y soportar la discriminación racial y social permanente. Estas regiones perdedoras en la globalización se mantienen como productoras de materias primas agrícolas y mineras cada vez peor pagadas en el mercado nacional e internacional y como proveedoras de recursos naturales y energía eléctrica y petrolera (Chiapas, Tabasco y Veracruz), por los que no reciben una compensación económica equitativa que sustente su desarrollo. El crecimiento agropecuario e industrial en estas regiones está frenado y ni siquiera la maquila, con su carga de aguda explotación de los trabajadores y destrucción ambiental, llega a su territorio.

El Plan Puebla Panamá del actual gobierno, lejos de impulsar el desarrollo

integral, autónomo y compartido del sur mexicano, pone el acento en la explotación de sus recursos naturales por las empresas transnacionales y en la integración subordinada de Meso América a los intereses estratégicos de la potencia hegemónica en el capitalismo actual. Este plan amenaza con profundizar la expropiación de las tierras de los campesinos, la aguda explotación de la fuerza de trabajo, la destrucción de la cultura y la identidad de sus comunidades, particularmente los indígenas, y la expoliación y destrucción de la biodiversidad (Bartra, 2001).

El presupuesto del gobierno federal mantiene la centralización de la mayor parte de los ingresos fiscales en el Poder Ejecutivo federal, sin avanzar en el camino de la redistribución equitativa del gasto hacia los municipios y estados, los cuales enfrentan graves dificultades para atender la inversión en infraestructura y el gasto corriente en servicios públicos, sobre todo educativos, que requiere su desarrollo y la garantía de los derechos sociales de los sectores mayoritarios. La discrecionalidad y falta de transparencia en el manejo federal de las transferencias fiscales a los estados y municipios es parte importante del centralismo fiscal.

Al margen de cualquier acuerdo con las autoridades estatales y locales, el gobierno federal sigue tomando decisiones unilaterales y autoritarias que afectan a las regiones, como la reducción de las aportaciones presupuestales a los estados en 2002, la abortada localización del nuevo aeropuerto metropolitano del Valle de México en Texcoco o la eliminación del subsidio eléctrico que afecta gravemente a los consumidores del norte del país. El federalismo y la democracia regional se mantienen como letra muerta.

Un factor sustancial de la desigualdad regional del desarrollo es la distribución territorial de la inversión en infraestructura hidráulica, energética, de transporte y comunicaciones. Deficitaria en todos los ámbitos territoriales debido a la insuficiencia de los ingresos públicos en los distintos niveles de gobierno, la inversión se ha concentrado histórica y acumulativamente en las regiones y ciudades más desarrolladas, en su conexión directa y en la integración sur-norte orientada hacia Estados Unidos.

Durante el sexenio de Salinas de Gortari, en medio del auge privatizador, se buscó la solución al retraso en la infraestructura carretera mediante la concesión de la construcción y manejo de autopistas de peaje a empresas privadas; en este proceso, se reprodujo la concentración de la inversión en las conexiones entre los

puntos más rentables del sistema urbano-regional. Al mismo tiempo, el gobierno federal abandonó el resto del sistema carretero, que rápidamente se deterioró, agravando la situación de aislamiento relativo de las regiones atrasadas. El fracaso del esquema privatizador llevó en muy corto tiempo a un rescate carretero que ha costado miles de millones de pesos a los contribuyentes. Hoy, el gobierno de Fox intenta nuevamente aplicar este modelo, con el riesgo evidente de otro descalabro similar.

En las comunicaciones, se aplicó la privatización total, que dio lugar a un monopolio privado en telefonía fija (Telmex) y a la presencia dominante de empresas trasnacionales en otros ramos de sector, que concentran mayoritariamente su inversión en las áreas urbanas y regionales más desarrolladas y rentables.

En el caso de la energía –gas, petróleo, electricidad–, el esquema fiscal aplicado por el gobierno federal ha drenado los recursos de las empresas públicas correspondientes (Pemex, CFE, CLFC) impidiendo que ellas atiendan adecuadamente sus necesidades de mantenimiento y de expansión de la producción; este drenaje fiscal tampoco ha permitido que las regiones, en su mayoría atrasadas, que aportan sus recursos energéticos, reciban una participación en las rentas y los beneficios para sustentar su desarrollo. La alternativa del gobierno de Fox es la privatización abierta o encubierta, lo que también impedirá que se beneficien las regiones proveedoras, al tiempo que aumentará el costo de los productos y servicios para todos los usuarios. Aún en las regiones ganadoras, encontramos microrregiones, sobre todo campesinas, hundidas en el atraso y la pobreza, muchas veces localizadas a corta distancia o en la periferia de las grandes ciudades que ejemplifican la modernidad de la acumulación global de capital.

Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo federal han propuesto o aprobado normas legales que impulsen el desarrollo regional y creen los instrumentos y las instituciones necesarias para lograrlo efectivamente. La Ley Federal de Planeación Democrática data ya de 20 años, sin que se le hayan introducido las modificaciones que podrían hacerla eficaz en la nueva realidad, sin que siquiera se haya adecuado al modelo neoliberal. La política neoliberal ha sustituido a la planeación del desarrollo regional armónico y equitativo por el “libre mercado” que acentúa las desigualdades. La planeación está convertida en un discurso demagógico carente de instrumentos reales para promover el desarrollo de las regiones atrasadas.

## **La urbanización generalizada y la crisis urbana**

La sociedad mexicana se urbanizó aceleradamente en la segunda mitad del siglo XX, al tiempo que cambiaba su estructura económica y social, su cultura y sus valores, sus patrones de conducta, sus necesidades y aspiraciones. En el año 2000, el 61.4 por ciento de la población mexicana habitaba en ciudades de más de 15 mil habitantes (Covarrubias, 2000); en los próximos decenios seguramente llegaremos a la urbanización casi total de la población. En medio siglo, transitamos de las ciudades tradicionales a las metrópolis y a las ciudades región, como formas socioterritoriales dominantes en el sistema urbano nacional.

En el 2000, había nueve megaciudades de más de un millón de habitantes, en las que habitaba el 33.6 por ciento de la población; siete de ellas eran grandes zonas metropolitanas ubicadas sobre dos o más municipios o estados. Existían además 17 concentraciones urbanas de entre 500 mil y un millón de habitantes donde se asentaba otro 12.6 por ciento de la población nacional; 12 de ellas eran zonas metropolitanas. En suma, el 46.2 por ciento de los mexicanos habitaba en grandes ciudades.

De continuar las tendencias demográficas observadas en la década 1990-2000, en el año 2020 existirán 18 concentraciones urbanas de más de un millón de habitantes, en las que habitará el 45.38 por ciento de la población total del país; 13 de ellas serán grandes zonas metropolitanas. Igualmente, habrá 17 concentraciones de entre 500 mil y un millón de habitantes, donde habitará un 10.08 por ciento adicional de la población total; 10 de ellas serán zonas metropolitanas. Por tanto, en 20 años, el 55.46 por ciento de los mexicanos habitará en grandes ciudades. Esta transformación de la estructura social y territorial plantea problemas cruciales a las políticas públicas y, en particular, a las que plantean la izquierda y sus gobiernos.

Muchas ciudades han desbordado sus límites municipales originarios y forman zonas metropolitanas asentadas sobre dos o más municipios, en ocasiones pertenecientes a diversas entidades federales, por lo que su gestión se halla fragmentada entre diversas autoridades locales, lo cual entorpece la planeación, la inversión y la gestión del desarrollo urbano; los ejemplos más significativos son las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla-Tlaxcala y Torreón-Gómez Palacio-Lerdo.

Hemos entrado en un nuevo estadio de la concentración urbana: la formación de ciudades región consistentes en tramas urbanas densas y discontinuas constituidas por varias zonas metropolitanas y múltiples asentamientos humanos, integrados por una densa red de infraestructuras y por intensos flujos de personas, mercancías, capitales e informaciones, donde las ventajas de aglomeración y de localización y las externalidades se hacen indiferentes y más o menos homogéneas (Pradilla, 1998b y 2002a). Se consolidan, también, sistemas urbano regionales, que sin alcanzar la importancia de la forma anterior, modifican profundamente la estructura territorial y las formas de vida de la población involucrada.

La economía de las grandes zonas metropolitanas, sobre todo la del Valle de México, ha sufrido en los últimos dos decenios un intenso proceso de desindustrialización, es decir, de pérdida del peso relativo de la industria urbana en el total nacional; desaparición de empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas; y caída de la participación de la industria en el PIB local total. Tenemos que encontrar las explicaciones en la apertura externa incondicional y abrupta, la desigual competencia con los productos importados, y la contracción del mercado interno. Hoy, cuando se esfuma el espejismo de la maquila, las ciudades fronterizas, que crecieron como espuma las tres últimas décadas del siglo XX, viven también el estancamiento productivo o la desindustrialización y ven agravarse los problemas urbanos que produjo su crecimiento acelerado.

En su lugar, se reproduce una terciarización polarizada entre un sector moderno reducido y un muy amplio sector informal de trabajo ilegal, no regido por la lógica de la acumulación de capital o donde impera el trabajo precario.

Cerca de la mitad de la población urbana económicamente activa sobrevive en estas actividades inestables, con baja remuneración, carentes de seguridad social y cuya finalidad y realidad es la subsistencia (Méndez, 2002), aunque sobre sus espaldas cargue con la generación de beneficios para fayuqueros, importadores semilegales, distribuidores, productores piratas, mafias organizadas y empresas transnacionales productoras. El sector terciario moderno, concentrado y transnacionalizado, poco creador de empleo, está destruyendo al pequeño y mediano comercio, transformando la estructura de las ciudades y generando cambios de uso del suelo que afectan sobre todo el uso habitacional y expulsan población hacia la periferia rural (Pradilla, 2002b).

El 61.7 por ciento de los pobladores urbanos mexicanos vive en situación de pobreza moderada o extrema (Boltvinik, 2002), debido al desempleo abierto o encubierto, la crisis de la artesanía y la pequeña industria, la informalidad y la continua caída de los salarios e ingresos reales de los trabajadores durante 26 años.

La producción agropecuaria en las áreas rurales atrapadas dentro de los sistemas urbanos o periféricas a las metrópolis, en las que se aplican las mismas políticas agrarias –insuficientes e inadecuadas– que en el resto del país, se deteriora desperdiciando sus ventajas de localización; sus habitantes jóvenes sumidos en el atraso y la pobreza se vuelven trabajadores urbanos; y la tierra rural o de reserva ecológica, necesaria para la sustentabilidad ambiental, se urbaniza aceleradamente.

Las grandes ciudades y los sistemas urbanos padecen problemas graves y crecientes. La delincuencia urbana se incrementó notoriamente desde los ochenta como efecto del aumento del desempleo y la pobreza, la acción del crimen organizado y globalizado y la persistencia de la ineficiencia y la corrupción en los aparatos policiales y judiciales. La ineficaz lucha contra la delincuencia organizada o incidental devora parte importante y creciente de los presupuestos locales, restando recursos a la atención de sus causas socio-económicas estructurales.

Los déficits cuantitativos y cualitativos de infraestructura de vialidad, agua potable y drenaje, de servicios públicos como educación, salud y recreación, y de vivienda son aún muy elevados, sobre todo en las zonas populares urbanas segregadas y excluidas. La privatización de segmentos significativos de la infraestructura y los servicios antes controlados por el sector público, y la creciente participación del capital privado en su prestación –sobre todo en abasto alimentario, educación, salud y recreación–, ante la insuficiente atención pública, han cerrado aún más su acceso a los sectores populares empobrecidos.

El deficiente transporte público, estatal o concesionado, y el crecimiento incesante del número de automóviles particulares han saturado la vialidad urbana y generan situaciones graves de contaminación del aire en un número creciente de zonas metropolitanas. Los gobiernos locales han optado pragmáticamente por sostener una carrera imposible de ganar con el automóvil mediante la construcción de

nuevas vialidades interiores que, lejos de resolver la congestión, la agudizarán en el futuro.

El deterioro de las condiciones generales y particulares de la reproducción social de la mayoría de los trabajadores urbanos afecta notoriamente su productividad y, por tanto, la competitividad de las grandes ciudades en el marco de la competencia interna y externa.

Las finanzas públicas locales enfrentan diversos problemas: ilimitadas transferencias federales y estatales a los gobiernos locales, bajos ingresos propios debido a la evasión fiscal y a las bajas e inequitativas tasas impositivas y tarifas de servicios locales. El gasto público se orienta sobre todo al gasto corriente, en particular a la lucha contra la delincuencia, limitando la inversión en infraestructura y servicios. En estas condiciones, los gobiernos urbanos carecen de recursos suficientes para atender los problemas heredados del pasado, enfrentar las demandas de la creciente población y promover el desarrollo económico y social equitativo y ambientalmente sustentable.

Por esta razón y por la política neoliberal, el Estado federal y la mayoría de los gobiernos locales han abandonado su responsabilidad social, entregando crecientemente la inversión y la gestión de la infraestructura y los servicios públicos a la empresa privada; el resultado ha sido la elevación de los costos de los servicios sin que mejore su calidad y la exclusión de las áreas urbanas populares poco rentables para los empresarios.

Para “luchar contra la pobreza” y sobre todo evitar sus conflictos, el gobierno federal y la mayoría de los gobiernos locales incluidos algunos “de izquierda” han tomado el camino de las políticas compensatorias y asistencialistas promovidas por los organismos internacionales, materializadas en ayudas monetarias insuficientes aun para la subsistencia, focalizados en los segmentos más vulnerables, discrecionalmente asignadas y sin sustento legal que les dé permanencia y certidumbre. Estos apoyos no atacan las causas estructurales de la pobreza, sólo la mitigan en los casos más extremos y no alcanzan a cubrir a todos los pobres que produce el modelo neoliberal globalizado. Así, se sustituye crecientemente la garantía universal y permanente de los derechos sociales básicos, consagrada en la ley y sustentada en instituciones sólidas y con presupuesto adecuado a las necesidades, que constituyó el eje esencial de la reivindicación de los movimientos sociales y los partidos políticos de izquierda

desde hace cerca de un siglo y que logró significativas conquistas como la seguridad social y la consagración de muchos derechos sociales en la Constitución.

Víctima del fundamentalismo neoliberal, la primacía del mercado y la “libre empresa”, del “adelgazamiento” del Estado y del pragmatismo imperante en las decisiones gubernamentales, la planeación urbana como instrumento para el diseño anticipatorio y socialmente equitativo del desarrollo se ha convertido en discurso que no expresa las políticas públicas reales, carente de instrumentos efectivos de acción y que no cuenta con el consenso democrático de los actores sociales urbanos. Carentes de políticas concretas e instrumentos de acción, los programas nacionales de desarrollo urbano de los últimos gobiernos federales han sido sólo textos demagógicos sin efecto sobre los grandes problemas estructurales del sistema urbano nacional y sus componentes. El desarrollo urbano está en manos del “libre mercado” y los intereses de los actores individuales urbanos, en particular del capital inmobiliario y los grandes empresarios.

La idea de repartir beneficios urbanos a todos los sectores sociales por igual ha sustituido al concepto democrático de distribuir equitativamente, es decir, desigualmente según la necesidad. Se entregan al capital privado porciones de ciudad para sus megaproyectos inmobiliarios; se les facilita su inversión con incentivos y descargas fiscales y obras públicas, sin ningún acuerdo o contrato de corresponsabilidad ni la exigencia de distribución de beneficios al resto de los ciudadanos y, sobre todo, a los sectores empobrecidos o excluidos involucrados.

La ciudad, producto colectivo por esencia, se privatiza crecientemente como resultado de la entrega al capital privado de infraestructuras y servicios, de la introversión restrictiva de las calles y plazas en las nuevas formas urbano-arquitectónicas como centros comerciales y corporativos, el cierre de áreas habitacionales y su control por la seguridad privada para “enfrentar la inseguridad” y, en el otro extremo, la ocupación de los espacios públicos por las mil caras de la informalidad.

En general, las políticas públicas de los gobiernos locales han caído en el pragmatismo total. Los programas de desarrollo urbano se arman como sumatoria de acciones inconexas para enfrentar los problemas coyunturales más graves o buscar sumar apoyos político-electorales; por lo general, son letra muerta que no

compromete a nadie. Hay una ausencia total de proyectos de ciudad, de mediano y largo plazo, integrales y coherentes. Esto es válido aun para muchos gobiernos locales del PRD, el PT, el PVEM y otros autodenominados de centro o izquierda, independientemente de su posible éxito político.

La legislación vigente no ofrece respuestas a las nuevas realidades económicas, sociales y políticas urbanas. La Ley Federal de Asentamientos Humanos, con treinta años a cuestas, es hoy insuficiente y obsoleta para atender los viejos y nuevos problemas urbanos, sobre todo en las ciudades región, los sistemas urbanos regionales y las zonas metropolitanas donde la fragmentación en múltiples gobiernos locales y, aun, estatales es una barrera para la planeación, la inversión y la gestión del todo territorial. Los partidos políticos, incluido el PRD, parecen no tener claros estos cambios, por lo que no incluyen la búsqueda de soluciones concretas en sus plataformas programáticas o sus agendas legislativas ni aportan nuevas propuestas legales o de política pública para atenderlos.

Por lo anterior, las grandes ciudades siguen siendo asiento de múltiples formas de organización social autónoma –territorial, sectorial u horizontal–, que expresan el impacto de la problemática urbana sobre los sectores más explotados y excluidos, y escenario de continuas movilizaciones y reivindicaciones sociales, así como el objeto de la formación y operación de organizaciones no gubernamentales, no integradas institucionalmente al proceso de desarrollo. Estas formas y prácticas sociales constituyen, a pesar de su dispersión y debilitamiento, un poderoso factor de cambio político, cultural y social. Tanto el PRD como otros partidos políticos mantienen una relación esencialmente clientelar, instrumental o electoral con estos movimientos y organizaciones; no han llegado a construir una articulación de acompañamiento, aprendizaje y representación de las demandas, que respete su autonomía y diversidad política.

### **La necesidad de una política alternativa para el desarrollo regional y urbano**

Puesto que en los dos próximos decenios la sociedad mexicana llegará a la urbanización casi completa, profundizando el cambio cultural y de las expectativas objetivas y subjetivas de la población, la izquierda, en particular el PRD, debe reconocer los problemas urbano regionales históricos y los cambios ocurridos en los dos decenios pasados, para diseñar una política alternativa que se debata ampliamente con la sociedad y con sus militantes y activistas y se integre a sus plataformas electorales y sus agendas legislativas nacionales, estatales y locales.

Este es un aspecto nodal de la puesta al día de la política de izquierda, para presentarse ante la opinión pública como una alternativa de los trabajadores al neoliberalismo, como una opción para el futuro, con condiciones para impulsar un cambio seguro para México y para gobernarlo de otra manera. En una sociedad plenamente urbanizada, donde la ciudad y la región se funden en territorios a la vez homogéneos y heterogéneos, integrados y fragmentados, la política urbano-regional debe convertirse en una práctica continua, estratégica, que materialice y territorialice las diversas políticas económicas, sociales, ambientales y culturales; debe convertirse en una política integradora para toda la sociedad.

El autor es Doctor en Urbanismo, Profesor–investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, Investigador Nacional SNI–SEP.

## **Bibliografía**

Aguilar Monteverde, Alonso, 2002, Globalización y capitalismo, Plaza y Janés, México.

Bartra, Armando (coord.), 2001, Mesoamérica. Los ríos profundos. Alternativas plebeyas al Plan Puebla Panamá, Instituto Maya AC y otras instituciones, México.

----- 2002, “Un campo que no aguanta más”, La Jornada, 14 y 15 diciembre 2002, México.

Bendesky, León y Víctor Godínez, 2002, “De las expectativas no cumplidas a la inviabilidad económica y social del modelo económico”, documento de trabajo inédito, 9 de septiembre de 2002, México.

Boltvinik, Julio, 2002, “La pobreza en México. Evolución y características”, documento de trabajo inédito, México.

Cárdenas Solórzano, Cuauhtémoc, 1999, México en el mundo global. Derechos humanos, paz, crecimiento y ley, Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, México.

Covarrubias, Francisco, 2000, "Perspectiva del sistema urbano nacional", El Mercado de Valores, No. 3/2000, marzo, Nacional Financiera, México.

Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México, 2000, La Ciudad de México hoy, Bases para un diagnóstico, Corporación Mexicana de Impresión, México.

Gray, John, 1998, Falso amanecer. Los engaños del capitalismo global, Barcelona, 2000.

Méndez, Jesús, 2002, "Diagnóstico del mercado de trabajo", documento de trabajo inédito, 20 mayo 2002, México.

**Pradilla Cobos, Emilio**, 1993, Territorios en crisis. México 1970-1992, Red Nacional de Investigación Urbana y Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México.

----- 1996a, "México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El futuro en busca del presente", en Coufignal, Georges y Germán A. de la Reza (Eds.), 1996, Los procesos de integración en América Latina. Enfoques y perspectivas, Institute of Latin American Studies, Stokholm Uniiversity, Edsbruk, Suecia.

----- 1998b, "Metrópolis y megalópolis en América Latina", en Diseño y Sociedad, No. 8/98, Otoño, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México.

----- 2002a, "El futuro de las grandes metrópolis latinoamericanas", en Villegas Dávalos, Raúl (coord.), 2002, ¿Adónde va el mundo?, Fundación Cultural Nuevo Milenio, México.

----- 2002b. "Ciudad de México: de la centralidad a la red de corredores urbanos", ponencia al VII Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de

Investigadores sobre Globalización y Territorio, Universidad de Camaguey, 27-29 noviembre 2002, Camagüey, Cuba.

Desde mediados de 1997, la industria maquiladora de exportación cambió a un ciclo declinante, en términos de variación porcentual mensual del número de establecimientos y del personal ocupado, que se estabilizó a finales de 1998 y se hizo más acentuado desde mayo de 2001, pasando a valores negativos desde septiembre de ese año. Esto se explica en parte por la desaceleración en Estados Unidos, pero sobre todo por la pérdida de ventajas competitivas frente a otros países (Bendesky y Godínez, 2002).

Según el Sistema de Cuentas Nacionales de México de INEGI, en 2000, los estados de la Región Centro de México concentraban el 41.97 por ciento del Producto Interno Bruto total y el 48.28 por ciento del Producto Interno Bruto del sector manufacturero nacional.

Los ejemplos son abundantes: las empobrecidas áreas rurales ubicadas en el interior de la megalópolis del centro y en la periferia de las 6 zonas metropolitanas que la forman, la sierra del Estado de Puebla, el campo guerrerense o quintanarroense en torno a los modernos complejos turísticos de lujo, etcétera.

Los casos son la Ciudad Región del Centro del país, formada por la Zona Metropolitana del Valle de México, 5 zonas metropolitanas más y cientos de asentamientos humanos menores en su interior; la Ciudad región del Noreste, que se forma en torno a Monterrey, incluyendo a Saltillo-Ramos-Arispe y algunas ciudades fronterizas, muy relacionada con las ciudades del sur de Texas. Tijuana se integra cada vez más a la Ciudad Región Californiana en EU.

Los ejemplos más importantes son el del Bajío, del norte de Michoacán, Orizaba-Córdoba-Veracruz y de la Costa de Sonora y Sinaloa. La trama infraestructural y la intensidad de flujos entre sus centros urbanos prefiguran procesos futuros de conurbación y una integración territorial significativa. Para el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México, ver Fideicomiso, 2000, Cap. II.

Un ejemplo, lamentable por provenir de un gobierno “de izquierda”, es la construcción de un segundo piso al Periférico y al Viaducto, y de varios

megadistribuidores viales. Esta política ha sido criticada por la mayoría de los urbanistas, los ecologistas, los vecinos afectados y, paradójicamente por la oposición de derecha. En la práctica, compite por los recursos fiscales escasos con el desarrollo del ineficiente e insuficiente transporte público colectivo y promueve el uso del automóvil privado.

Desde el Programa Nacional de Solidaridad de Salinas de Gortari, se han sucedido diversos programas asistenciales compensatorios, con cambiantes denominaciones cada sexenio, orientados a distintos sectores empobrecidos. Algunos de ellos se recubren con denominaciones de apoyo al autoempleo productivo, como el Procampo, los créditos a los changarros o los microcréditos, cuyo monto en el caso de los sectores populares es tan limitado que se convierte en apoyo a la subsistencia básica de quienes los reciben. Gobiernos “de izquierda” como el de López Obrador en el Distrito Federal han seguido el mismo camino, con sus apoyos a adultos mayores, hijos de madres solteras, jóvenes en situación de riesgo, discapacitados, desempleados, etcétera.

Está práctica se observa en casi todas las ciudades desde hace decenios, con particular impacto destructivo sobre las áreas patrimoniales convertidas en zonas de despliegue del capital nacional y transnacional ligado al turismo. Un ejemplo notorio, por darse en un gobierno “de izquierda”, es la entrega sin condiciones de los corredores urbanos de Reforma-Centro Histórico y Catedral-Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, a los intereses privados turísticos, financieros, eclesiásticos e inmobiliarios, incluido el Grupo Carso del multimillonario Carlos Slim.